

Autoridad política debilitada y presencia ciudadana de rumbo incierto

Sin rumbo, la sociedad argentina continúa inmersa en un proceso de desorganización sin pautas para la reconstitución de un orden, y en consecuencia sin que sea posible avizorar una salida. La desconfianza en las instituciones económicas y políticas se ha generalizado, dando cauce a diferentes fugas: en primer lugar de la moneda, favoreciendo la corrida hacia el dólar como valor refugio y amenazando con desencadenar un proceso hiperinflacionario; del sistema bancario, que ya no es considerado confiable para efectuar las transacciones; del propio país, que es abandonado en los hechos o en la imaginación por miles de personas de toda edad y condición, aglomeradas en las puertas de los consulados. La desconfianza entre las personas se ha profundizado luego de los recurrentes saqueos, de modo tal que el miedo y la inseguridad son también un factor de disgregación social.

Isidoro Cheresky

El Gobierno no logra reconstituir su autoridad en la medida en que su legitimidad de origen está cuestionada¹, a ello se suma que en su desempeño se ha enredado en una maraña de decisiones que multiplican la fragmentación y los intereses en pugna. Hacia fines de diciembre de 2001, aún bajo el gobierno de Fernando de la Rúa, el congelamiento de los depósitos bancarios fue el dis-

Isidoro Cheresky: politólogo argentino; profesor de Teoría Política Contemporánea, Universidad de Buenos Aires; miembro de la Fundación Carlos Auyero.

Palabras clave: crisis, sistema político, cultura política, Argentina.

parador de una situación de excepcionalidad en que los derechos consagrados se suspendían (algunas formas del derecho de propiedad) y la suerte al menos patrimonial de los individuos se supeditaba a las decisiones circunstanciales de gobernantes y jueces. Poco después, la declaración del *default* (la cancelación del pago de la deuda pública) generó una situación de aislamiento internacional. Finalmente el abandono de la convertibilidad y la consiguiente devaluación y pesificación de la economía, generaron una multiplicidad de situaciones que debían ser arbitradas, en particular el valor en pesos de los depósitos congelados, de las deudas contraídas con los bancos y con prestamistas privados, la adecuación de los contratos de alquiler y otros compromisos contractuales. En la medida en que caía verticalmente la recaudación impositiva y se agravaba la situación social por pérdida del valor real de los salarios y del incremento de la desocupación, se planteaba la alternativa de cobrar impuestos excepcionales (a las exportaciones y a los grandes beneficiarios de la pesificación de deudas; en un momento se proyectó un impuesto a las empresas privatizadas que habían obtenido grandes ganancias en los años 90, pero debió ser abandonado por las trabas legales y la fuerza de los intereses en juego) y controlar los precios máximos de los alimentos de la canasta familiar. Cuando la flotación libre del peso produjo una repentina y espectacular «corrida» hacia el dólar, la idea de una mayor intervención gubernamental que aventara el inminente peligro de hiperinflación se hizo más intensa.

Podrían por supuesto enfatizarse las dimensiones estructurales que hacen que la Argentina esté atravesando un verdadero derrumbe, debacle o bancarrota general –según el modo en que diferentes analistas han definido la situación.

1. El actual presidente Eduardo Duhalde goza de una autoridad precaria, derivada del origen indirecto (aunque institucional) de su mandato y del desapego de los ciudadanos por la representación política. El 1º de enero de 2002 fue elegido por la Asamblea Legislativa, que votando por un peronista daba cuenta de la mayoría parlamentaria existente. El acceso de Duhalde se produjo luego de una serie de percances institucionales. El 20 de diciembre había renunciado De la Rúa y el sucesor designado por la Asamblea Legislativa fue el gobernador peronista de San Luis, Adolfo Rodríguez Súa (en razón de la vacancia en la vicepresidencia producida en octubre de 2001 luego de la espectacular renuncia del titular de ese cargo, Carlos Chacho Alvarez, que había marcado el estallido de la coalición gobernante). Pese a que la mayoría peronista había tenido la intención de designar un mandatario para la convocatoria a elecciones en el lapso de tres meses, Rodríguez Súa, apoyado por los gobernadores peronistas de las provincias menores, permaneció sólo una semana en el poder. Dimitió por la doble presión del aislamiento en el seno de su partido, donde se sospechaba que querría quedarse en el poder por el lapso presidencial faltante (hasta octubre de 2003) y de la sociedad movilizadora que encontró en la composición de su gabinete otro blanco para repudiar la corrupción de los políticos. Recién entonces se pensó en Duhalde, quien aunque había triunfado en las elecciones senatoriales de octubre por la provincia de Buenos Aires, no contaba con consenso ni liderazgo partidario –al punto de haber estado al margen de las deliberaciones que se produjeron luego de la renuncia de De la Rúa. Duhalde llegó a la presidencia cuando los mecanismos institucionales habían puesto en evidencia el fraccionamiento político existente.

De hecho, la recuperación de la senda del crecimiento, la reanudación de los lazos de comercio e inversión con el mundo, y en consecuencia la superación de la decadencia social expresada en índices inéditos de desempleo y pobreza parecen inciertos. En todos estos aspectos la caída continúa². Pero lo que denota quizás más la gravedad de la situación es la profunda desorganización de la representación política y de los lazos sociales. La vida pública ha estado dominada desde diciembre último por la irrupción social bajo las formas separadas del saqueo y de la protesta urbana masiva. Los saqueos a supermercados pero también a una variedad de comercios barriales transformaron algunos vecindarios en tierra de nadie, poniendo en el tapete la fuerza destructiva que acarrea ese condicionamiento antipolítico de la vida humana que es la irrupción de la necesidad. Por otra parte una inédita y heterogénea movilización urbana colocó a la protesta ante el Gobierno y las instituciones como un factor permanente de interpelación a la legitimidad política. El cacerolazo dio la tónica de una situación en que los lazos de representación estaba profundamente cuestionados.

En conjunto la situación social ha visto constituirse dos escenas, en un caso con actores públicos sorprendentes desde el punto de vista de los conocidos hasta ahora, teniendo como protagonistas a los pobres y a las «clases medias». Sin embargo, cabe preguntarse si es satisfactorio denominar estas nuevas presencias con rótulos heredados. En medio de la diversidad de elementos que configuran la actual situación y que inhiben un diagnóstico general certero así como predicciones sobre la evolución futura, los rasgos que ponen en evidencia la naturaleza política de los problemas remiten a la debilidad de las creencias colectivas o a la desconfianza generalizada, por una parte, y a la inestabilidad de los poderes públicos y del propio presidente que en conjunto no gozan de autoridad reconocida, por la otra. Las decisiones generales y la adopción de un plan de Gobierno coherente tropiezan con la licuación de poder, que lleva a oscila-

2. Con la salvedad de las exportaciones que sin embargo están también trabadas como consecuencia de la actual situación. La inflación y la recesión tienen efectos demoledores sobre los sectores populares. Dada la diferencia de consumos, la incidencia de la inflación si se mantienen los índices actuales sería de 71,5 % para los más pobres y de 28,4% para los más ricos. De este modo, 58% de los argentinos quedaría debajo de la línea de pobreza (Informe de la consultora Equis citado en *La Nación*, 11/3/02). Según las estimaciones del Indec, en mayo de 2001 estaban debajo de la línea de pobreza 13.700.000 personas, 38,1% de la población. No solo la creciente desocupación, que según estimaciones de 2001 habría sido superior a 22%, incide en esos índices de pobreza. La propia remuneración del trabajo también ha declinado en el periodo en parte próspero de los años 90: entre 1994 y fines de 2000 el ingreso medio de los hogares se redujo 4,3%, que desciende a 11% en el caso del estrato bajo (40% de los hogares con ingreso más bajo) y a 8% para el estrato medio; cf. M. Marcó del Pont y H.M. Valle: «La crisis social de los 90 y el modelo de convertibilidad» en Marcelo R. Lascano (comp.): *La economía argentina hoy*, El Ateneo, Buenos Aires, 2001. Sin embargo las conclusiones de este último análisis han sido objeto de controversia.

ciones en las decisiones que se adoptan y a que se definan centros de poder alternativos con una parcial eficacia en su acción y que en conjunto dibujen una situación de caos. Los decretos del Ejecutivo, las leyes dictadas por el Parlamento y la interpretación que los jueces dan a los derechos constitucionales son ejemplos de la diversidad de centros decisionales, a lo que deben agregarse los poderes provinciales que gozan de considerable autonomía.

Un factor decisivo en el condicionamiento de la vida política lo constituye a su vez la intervención del FMI y de otros poderes externos o internacionales, que encarnan la orientación pautaada por los principales centros de poder, en primer lugar Estados Unidos. El futuro económico y político del país parece depender de una asistencia externa desde que se declaró el *default* y toda otra fuente de inversión o de crédito parece vedada o restringida³. El país se encuentra entonces bajo tutela y debe orientar sus decisiones según un plan definido por los expertos extranjeros⁴. Así, en aspectos esenciales el margen de la decisión política democrática ha desaparecido, y esta situación de extrema dependencia es exhibida y manipulada en la relación entre los actores intervinientes sin ningún tapujo. Pero paradójicamente esta dependencia tiene un efecto ordenador. Voluntariamente o a regañadientes las diferentes posiciones e intereses se alinean y aceptan la agenda de temas y restricciones provenientes de los organismos internacionales en la expectativa de que su visto bueno llegue en algún momento y con él las líneas de crédito y el mejoramiento de los intercambios. Por el momento la reacción nacionalista está acallada y aunque una parte de la población adheriría a políticas aislacionistas, la protesta pública en este respecto es limitada⁵.

***En aspectos
esenciales el
margen de
la decisión
política
democrática
ha desaparecido***

3. Un índice de riesgo país superior a los 4.000 puntos ilustra la marginación de los mercados financieros; una marca que por otra parte ha dejado de estar en el centro de la atención puesto que la situación permanente ya no puede ser afectada por variaciones circunstanciales.

4. Rudiger Dornbusch, en una nota escrita en colaboración, sostuvo recientemente que para salir adelante la Argentina debería ceder temporalmente su soberanía, y en particular su política monetaria debería estar controlada por un equipo de representantes de bancos centrales extranjeros. Esta recomendación, que unas semanas atrás fue considerada como una provocación, parece ser la pauta actual.

5. La eventual ayuda externa es uno de los puntos en que la opinión pública se muestra más dividida. Según una encuesta reciente, 54% de los entrevistados considera que el país necesita ayuda externa en tanto que 42% piensa que puede salir solo de la crisis (encuesta de Gallup de 4-8/4/2002, en *La Nación*, 14/4/02). Según otra encuesta hecha en Buenos Aires y alrededores, 451 responde afirmativamente a la pregunta «¿Tendría que venir un grupo internacional que asesore, controle o ejerza tareas de gobierno?» (Ibope-OPSM, *Página 12*, 31/3/02). También en Buenos Aires y alrededores, aunque 53% de los entrevistados se manifestaba de acuerdo con negociar con el FMI contra 37% de opiniones negativas, la tendencia estatística era fuerte: 41% por la nacionalización de la banca contra 39% en desacuerdo; 65% por la reestatización de las empresas públicas privatizadas contra

Pero la posibilidad de que no haya una ayuda internacional significativa que coadyuve a frenar la caída de la economía⁶ es real, y abre un interrogante sobre las reacciones que podrían producirse en tal extremo.

La gravedad de la situación hace más apremiante la pregunta sobre la naturaleza de su debate. Precisar un diagnóstico permitiría pensar en el camino de la recuperación. Hay una coincidencia en considerar el problema argentino como de naturaleza política, lo cual es tanto más llamativo cuanto que es evidente la gravedad de su situación económica estructural⁷. Y sin embargo, efectivamente el problema parece ser el de la capacidad para fijar un rumbo y hacer converger las energías nacionales en esa misma dirección, lo que se traduce, desde la óptica de las instituciones políticas, en una búsqueda de autoridad del Gobierno y del Estado, y desde el punto de vista de la sociedad en requerimiento de creencia y confianza en el lazo social, en los acuerdos básicos y en los liderazgos legales. Este diagnóstico va a contracorriente de la tradicional explicación sobre el origen de las crisis y aun de ciertas evidencias presentes. ¿No hay un causante y un beneficiario de los males argentinos? Y más precisamente, ¿no hay un agente social en el origen de los males? Aunque el capitalismo y la globalización son mencionados recurrentemente, esta imputación está lejos de tener la verosimilitud y fuerza del pasado.

La terrible sensación que predomina, no desmentida por la información disponible, es que la bancarrota no es algo que vaya en provecho de ningún sector social particular, al menos de los concernidos directamente, aunque las consecuencias sean muy diferentes para unos y otros. Ello es así porque las lógicas del capitalismo financiero que han contribuido al endeudamiento del país y a la obtención de beneficios son exactamente lógicas, es decir que benefician a los ocasionales tenedores de títulos y otros papeles financieros que pasan de mano en mano, pero no se trata de agentes definidos y permanentes que determinen y aprovechen los beneficios. Es más, el mundo de las finanzas genera perdedores tanto entre los grandes como entre los pequeños participantes del mercado. Por supuesto está el amplio y creciente ámbito de quienes están fuera

26% en contra; la intención mayoritaria era de no dar la espalda al mundo: 60% en contra de no pagar más la deuda externa, frente a 34% con la opinión contraria (Hugo Haime y Asociados, *Página 12*, 24/3/02).

6. El PBI ha venido cayendo en los últimos cuatro años, para 2002 se prevé una depresión mayor que en el pasado, con un descenso que varía entre 7,5% según las previsiones oficiales y más de 10% según economistas reconocidos.

7. A1 momento de declararse en cesación de pagos, Argentina tenía una deuda externa equivalente a la mitad de su PBI. Este peso se había hecho abrumador dado el estancamiento y luego el retroceso económico. El gasto fiscal y la evasión impositiva eran factores que acentuaban el carácter deudor y deficitario de la economía. La espiral de descrédito no hacía sino agravar la situación.

del juego. Pero en lo que a este aspecto del análisis se refiere, la ausencia de agentes permanentes de la globalización y del capitalismo financiero acentúa un cambio de perspectiva y las miradas se dirigen a los responsables políticos, a los gobernantes y a los técnicos que los auxilian, que en su conjunto son quienes toman las decisiones y embarcan al país en tal o cual dirección. En ese sentido hay, como veremos, una politización, pero al mismo tiempo un sentimiento de impotencia pues ya no se trata de los responsables y menos aún de los enemigos sustanciales del pasado.

El argumento que aquí se desarrolla pone el acento en la posibilidad de reconstituir el lazo de representación política y la autoridad institucional, y recuperar un margen de soberanía que dé lugar a una deliberación y decisión democrática. Definir cuáles

son las posibilidades y los límites de semejante cambio requiere prestar atención a ciertos factores: los relacionados con la debilidad del Estado, con las transformaciones sociales que han modificado la configuración de intereses y actores emergentes, y con los cambios en la vida pública y por lo tanto en las nuevas condiciones para la constitución de fuerzas políticas y liderazgos.

El Estado argentino está cuestionado y desacreditado, pero la aspiración mayoritaria es que sea rehabilitado

La debilidad del Estado y los problemas de su reforma

El Estado argentino está cuestionado y desacreditado, pero la aspiración mayoritaria es que sea rehabilitado. Su ineficacia favoreció en los años 90 un proceso privatizador que según sus gestores aliviaría las cuentas públicas y eliminaría focos de corrupción. Hoy esa experiencia es fuertemente impugnada por la debilidad en el control público de la provisión de bienes sociales básicos. Las críticas a la clase política y la desconfianza en las instituciones políticas son ilustrativas de esta situación. La sospecha de corrupción, confirmada por los procesos judiciales relativos a los grandes negociados⁸, han dado sustento a la percepción de que el acceso al poder conduce al uso arbitrario de los fondos públicos y al tráfico de influencias.

Pero la debilidad del Estado no se remite solo a los actos de corrupción. Las fuentes son estructurales y residen en el modo en que cumple sus funciones distri-

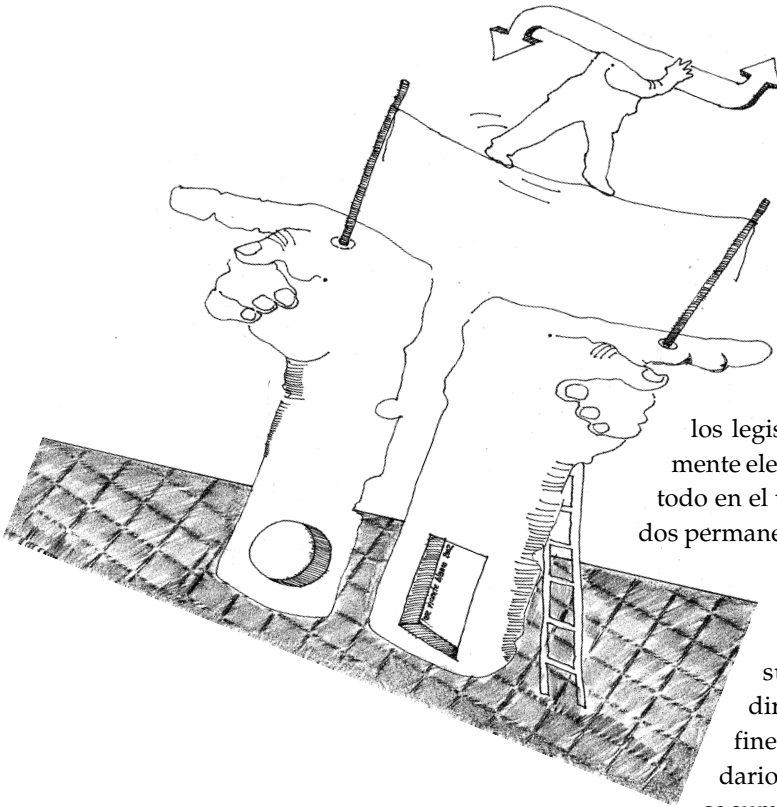
8. El más resonante que ha implicado al ex-presidente Menem y varios de sus ministros es el de tráfico de armas a Croacia y a Ecuador. Pero ha habido otros procesos judiciales vinculados con el lavado de dinero a los contratos de informatización entre IBM y Banco Nación y Ministerio de Hacienda.

butivas. Estos dispositivos son limitados, pero a través del empleo y de las obras públicas, y de las políticas sociales el Estado ha desarrollado un sucedáneo del Estado benefactor. La red político-administrativa y las estructuras de los principales partidos canalizan los recursos públicos y procuran incrementarlos, puesto que su vínculo social y su propia estructura se sostiene en esa circulación. Pero esta distribución se hace según criterios particularistas. No se ha establecido una política de derechos sociales o de algún otro criterio universalista que coloque a los individuos en pie de igualdad ante los recursos públicos sino que la atribución de éstos devienen favores como resultado de vínculos clientelares. Los recursos y particularmente la ayuda social generan de ese modo al mismo tiempo opresión política⁹. El funcionamiento dispendioso del Estado ha sido siempre de tratamiento problemático; pareciera que cuestionarlo supondría preguntarse por el principio redistributivo mismo propiciando la inacción pública ante las desigualdades sociales¹⁰.

La debilidad del Estado se expresa en primer lugar en su incapacidad de recaudar impuestos. Luego de la crisis de fines de diciembre la caída de la recaudación ha revestido las características de una rebelión fiscal, y es la contrapartida del descontento ciudadano al congelamiento de sus ahorros y a la poca representatividad del actual gobierno. Sin embargo, en condiciones normales la evasión impositiva es de tal magnitud que, según expertos, un cumplimiento razonable hubiese sido suficiente para afrontar el endeudamiento externo. La evasión fiscal es el síntoma de una situación social de considerable amplitud. Quienes la protagonizan son parte de los grandes empresarios pero también amplios sectores medios y altos integrados también por profesionales y funcionarios. Este comportamiento social ilustra la baja incumbencia por la suerte de lo público y una resistencia de hecho a las políticas redistributivas. La creciente debilidad del Estado contrasta con una evolución de la opinión pública, favorable a la intervención reguladora del Estado.

9. Esta forma de «intercambio político» se extiende a todo el sistema incluyendo las organizaciones de signo revolucionario. Lo ilustran los propósitos de Amancy Ardura, dirigente de la Corriente Clasista Combativa, que enuncia sin pruritos los criterios con los cuales se distribuye el subsidio estatal (Planes Trabajar) que administra su organización. Según relata, se emplea un sistema de puntaje para seleccionar los beneficiarios del plan: «La persona que va a una asamblea tiene un punto, el que va a una movilización, otro, y el que participa en un corte de ruta se suma otro. Los compañeros están en un listado y en el caso que hablamos los primeros 50 de la lista reciben la bolsa ... El sistema tiende a ser justo y solidario» (entrevista en *La Nación*, 3/3/02).

10. Ha surgido un velo de opacidad en cuanto al empleo de estos recursos y se ha inhibido la discusión sobre la aptitud de las políticas sociales para estimular la inserción social. La reforma de un Estado macrocefálico e ineficiente, sobre todo en el interior del país, es problemática porque pone en juego situaciones sociales que no pueden ser resueltas de manera precipitada. La reforma y la consiguiente reducción, calificación y modernización de su personal no puede encararse sin una política de desarrollo que asegure otras fuentes de empleo y otros recursos para la ayuda social. Este es uno de los puntos críticos de las actuales negociaciones con el FMI.



Por último, la propia representación política es objeto de crítica, que se ha concentrado en la denuncia del gasto político. La crítica se funda en que en algunos casos las retribuciones de los legisladores son inusualmente elevadas, pero por sobre todo en el uso arbitrario de fondos permanentes o excepcionales, destinados a costear numeroso personal legislativo, conceder subsidios de manera directa, o utilizarlos con fines personales o partidarios. A este descontento se suma el concerniente a las estructuras partidarias, que

con el actual sistema electoral presentan opciones cerradas, de voto a ciegas, al utilizarse el sistema de listas sábanas, lo que ha debilitado la imagen del legislador como representante instituido. En última instancia la significación de la actividad política en sí misma parece problemática –y esto sería lo esencial. Tras los cuestionamientos –fundados en muchos de los casos– se encierra en algunos sectores la vocación de reducir la política a su mínima expresión: una concepción antipolítica ve en esas instituciones una traba para la espontaneidad de la actividad social y en particular de los mercados. Pero si esta embestida tiene predicamento es porque incluso quienes son favorables al fortalecimiento de los instrumentos públicos se sienten impotentes ante su descrédito.

Las transformaciones económico-sociales y el nuevo individualismo. Los nuevos protagonistas sociales

El nuevo individualismo. La modernización del Estado y la economía emprendida en los años 90 profundizó rasgos propios de la evolución mundial. El crecimiento económico, particularmente en la primera mitad de la década, no aparejó

una mayor integración social sino que incrementó los índices de desocupación y de pobreza. Asimismo las desigualdades regionales se acentuaron. A la exclusión correspondía también una gran transformación en el mundo del trabajo: la precariedad, la inestabilidad y desreglamentación resultante tanto de transformaciones productivas como de cambios jurídicos implicaron un debilitamiento de la protección tradicional a los trabajadores. Paralelamente se impulsaron

*Una intensa
mercantilización
produjo una
transformación
social vertiginosa
que llevó
a los individuos
de una lógica
ciudadana a una
patrimonialista*

cambios en la relación del Estado a instituciones públicas con la sociedad, tendientes a reforzar el paradigma individualista del capitalismo norteamericano, en detrimento de los lazos mutualistas y de la responsabilidad estatal. El impulso al sistema de capitalización privada como alternativa a la jubilación por el sistema de reparto, la expansión de la cobertura de salud por el sistema llamada de «prepagas» como sustituto de las obras sociales sindicales e institucionales, y los seguros contra accidentes de trabajo, se cuentan entre las principales transformaciones asociadas con la idea de una electividad

y riesgo individual, en lugar de la participación en la previsión pública solidaria. Por otro lado, quizá con más intensidad que en otras latitudes se expandió, al menos en parte de la sociedad, una lógica de ahorro e inversión que incitaba a la permanente valorización de los patrimonios¹¹.

De modo que en Argentina una intensa mercantilización produjo una transformación social vertiginosa que llevó a los individuos de una lógica ciudadana a una patrimonialista. Los amplios sectores que fueron involucrados en este proceso cobijaron la expansión del nuevo individualismo pero asimismo una específica disociación y, en ciertos casos, tensión entre su condición social «tradicional» derivada del trabajo y su condición de ahorrista o inversor involucrado en los vaivenes del mercado financiero.

Los nuevos actores sociales. Los recientes acontecimientos vieron aparecer protagonistas inéditos, resistentes a ser designados con los nombres heredados del contexto social tradicional, que han ocupado el centro de la escena. Los participantes de los piquetes, de cortes de ruta y de saqueos, aunque no sean las mismas personas físicas, remiten al mundo de la pobreza y la exclusión, en tanto

11. La mencionada congelación de los depósitos bancarios afectó a 1.800.000 ahorristas, con 41.000 millones de dólares en plazos fijos bancarios. Esta cifra indica la magnitud de la población involucrada en el ahorro y la inversión.

que los «caceroleros» y vecinos de las asambleas barriales son clasificados como miembros de las «clases medias». Esta última designación en particular parece problemática. Está asociada a contextos conceptuales variados¹², pero sobre todo rememora el análisis en términos clasistas según el cual se trataría de una categoría residual respecto a las clases principales: la burguesía y la clase obrera. Cuando en un afán por delimitar la extendida movilización social de fines de diciembre pero cuyas trazas remontan a un periodo anterior, se hace referencia a «las clases medias», y se quiere delimitar una condición social a fin de explicar las características de la movilización social. En efecto, este recurso a la sociología parecería coherente en la medida en que la arena pública ha visto emerger al mismo tiempo acciones originadas en un protagonista designado socialmente como pobres o excluidos. Pero la pertinencia de la clasificación plantea la duda de si es posible reconocer esa presencia o esperar el surgimiento de las clases fundamentales que pondrían a esas «clases medias» en su lugar residual. Parece más fundado considerar que los caceroleros y los participantes de las asambleas barriales exteriorizan una nueva movilización social constituida en torno de identificaciones colectivas que comportan ideales, y que aunque no son ajenas a intereses dependen más que nunca de una producción pública de sentido; de manera que no expresan ninguna condición social preexistente a la movilización. Si se la quisiera identificar según términos sociales tradicionales se vería que está compuesta de asalariados y de propietarios de variada talla, pero debería tenerse en cuenta la propia precariedad y significación de esta distinción. Y en lo que hace a los asalariados discriminar su pertenencia a la clase obrera o a las tradicionales clases medias, supondría una tarea ímprobada dado que los trabajadores de la industria ya no son tan frecuentemente los «manuales» y otros asalariados no industriales han perdido el nivel de ingresos superior y el reconocimiento social de los «white colars».

Incluso el protagonista popular es también de nuevo cuño. El modo de constitución y al mismo tiempo de expresión de los excluidos es la protesta para paliar su situación. Los cortes de ruta denotan un modo de acción, con riesgos variados de derivación violenta, que está destinado a presionar sobre las autoridades por medio de una perturbación del orden. El recurso del excluido es recuperar significación de este modo: el bloqueo. Sin embargo, la organización de este espacio social parece ser extremadamente dificultosa. El individualismo y la relegación provenientes del apartamiento del trabajo y de otros víncu-

12. Por ejemplo en la sociología norteamericana de los años 50 fue objeto de gran atención, como también en los estudios de desarrollo y de sociología política de hace varias décadas dedicados a América Latina.

los sociales parecen ser parcialmente sobrellevados cuando intervienen grupos partidarios o sindicales externos que cumplen una función estructurante y dirigente. Estas formas de organización para la acción y de contención parecen ser inestables y estar sometidas a flujos significativos. Los saqueos que tuvieron su momento culminante a fines de diciembre de 2001 y contribuyeron al desorden y la protesta que provocó la caída de De la Rúa son una expresión de la significación y naturaleza de la esfera en expansión de quienes están apremiados por necesidades vitales. Existe ahí un poderoso potencial antipolítico y aun de disgregación de los lazos sociales. La exclusión puede amalgamar individuos que estando confinados en sus lugares de habitación, tienen potencialidad para movilizarse en direcciones de lo más variadas en búsqueda de satisfacción a sus necesidades apremiantes. Las asociaciones de desocupados y los piqueteros deben probablemente su éxito no a la envergadura de la representación efectiva que ejercen, pues parecen abarcar una minoría de ese sector, ni a la magnitud de sus concentraciones, sino a la representación virtual que comporta su acción. En otras palabras, buena parte de la sociedad sensibilizada por la magnitud de la situación social impone y se autoimpone respeto ante muy variadas expresiones de protesta provenientes de los excluidos¹³. La represión a estas manifestaciones por los gobiernos es sumamente limitada y prudente en razón de esa sensibilidad y tolerancia colectivas.

Los protagonistas sociales novedosos corresponden a una sociedad dominada por el individualismo y la fragmentación. Si la lógica de constitución de identidades colectivas se sustentaba en gran medida en pertenencias sociales y culturales intermedias que servían de tránsito hacia la representación política, ahora el relacionamiento de individuos o de grupos de interés y demandas está de algún modo provocado o incluso instituido por la acción gubernamental y política, y requieren también más directamente de una respuesta institucional. Ello paradójicamente sucede mientras la representación política y la legitimidad gubernamental están profundamente cuestionadas. Lo cierto es que los

13. Después de un periodo de frecuentes cortes de ruta y paros nacionales, en agosto de 2001 las encuestas revelaban que una mayoría se manifestaba en contra del corte de rutas: 62% contra 42%, a favor. Asimismo los paros generales eran rechazados por la mayoría: 71% (encuesta Gallup, en *La Nación*, 3/8/01). Sin embargo los paros fueron exitosos. Ello no puede atribuirse simplemente a la ausencia de transporte. Puede considerarse en cambio que aunque reticente al paro, la mayoría carecía de una motivación política o cívica para pronunciarse activamente en contra. Según una reciente encuesta nacional de Gallup, hay una adhesión variable a las protestas: 77% está de acuerdo con las reuniones vecinales, 70% con el cacerolazo, y 40% con los cortes de ruta (*La Nación*, 15/4/02). Una reciente encuesta es ilustrativa de las preferencias ciudadanas; ante la pregunta sobre la forma como deben expresarse las protestas, el orden de respuesta es el siguiente: mediante el voto, 42,9%; cacerolazo, 23,9%; participar en asambleas, 23,4%; huelgas y paros generales, 4,7%; piquetes y cortes de ruta, 1,7% (Hugo Haime y Asociados, *Página 12*, 10/3/02).

desocupados reclaman ante el Gobierno, y sus formas de reclamo y organización son tributarias de las leyes y políticas sociales. En cuanto a la protesta de las cacerolas, su movilización de rechazo se produce como reacción a las iniciativas estatales a la vez que despliega demandas fragmentadas y puntuales y en algunos casos contradictorias entre sí, que no podrán adquirir coherencia y en buena medida ser superadas si no es por una iniciativa de orden general que aparezca como justa, tarea que supone actuación y revalidación de una representación política.

Transformaciones en la vida pública. Las condiciones políticas para la emergencia de nuevos actores

La nueva ciudadanía. Por cierto la experiencia pública de los últimos años ha incidido en el descrédito de los políticos y de la política. Respecto a ésta, se ha desarrollado un sentimiento de impotencia, no se espera de los gobiernos cambios significativos ni se ve en el Estado la capacidad de dotarse de una voluntad capaz de contrarrestar los condicionamientos del sistema económico globalizado ni de los poderes fácticos locales. La experiencia de modernización de los años 90 que trajo inicialmente estabilidad y crecimiento no fue confrontada en ese entonces por alternativas críticas verosímiles. El «pensamiento único» se impuso entre los principales líderes políticos, de modo que la actual revisión crítica sobre rasgos salientes de la política de entonces alimenta el rechazo y el escepticismo. Una parte del común parece reprochar a los políticos, en particular a los opositores de entonces, no haber advertido a tiempo las consecuencias de esas políticas. Al mismo tiempo el incumplimiento de las promesas es otra fuente de descrédito, esta vez más orientada a los líderes y las alianzas políticas. Aunque lejano, el abandono de las promesas distribucionistas con las que Menem llegó al poder alimentó siempre un malestar en el seno del electorado peronista, aunque tardó en adquirir alcance público. La erosión constante del electorado peronista tradicional y la secularización del voto popular pueden sin embargo ser consideradas como expresión de la decepción ante los incumplimientos de las promesas. La decepción más reciente y de talla fue la provocada por el gobierno de la Alianza que no cumplió ni las promesas latentes de mayor justicia social ni las más explícitas de moralización de la vida política. Estas frustraciones han contribuido, junto a los cambios sociológicos apuntados anteriormente, a una transformación de los actores políticos y del electorado. La construcción de la democracia argentina contemporánea emprendida en 1983 comportó una evolución desde la referencia a un sujeto popular unificado como característica del periodo populista, a la conformación de una ciudadanía portadora de derechos, con una relación menos comprometida y pa-

sional con la vida pública pero a la vez más electiva¹⁴. En los 90 los procesos electorales y la ciudadanía se afirmaron como la fuente de legitimidad política y el recurso de regulación de la vida pública por excelencia. Cuando Menem tomó la iniciativa de postularse para un tercer periodo presidencial consecutivo, contrariando la Constitución, cuya reforma había propulsado, se desencadenó una lucha política que involucró a la oposición de entonces y dividió al propio peronismo. Pero los recursos institucionales de Menem fueron contrarrestados por el peso del consenso negativo de la opinión pública, por la amenaza de plebiscitos ciudadanos y por los resultados en las elecciones internas partidarias.

La ciudadanía aunque poco movilizada en los términos tradicionales, ocupaba, tanto en su figuración como estado de la opinión y como fuente electoral de legitimidad, el centro de la escena desplazando los recursos del pasado. Esto fue particularmente notorio en el peronismo, tradicionalmente propenso a hacer pesar los liderazgos y aparatos, o a poner en juego la movilización de masas como modos de resolución de los conflictos. Las elecciones de 1999 mostraron también de un modo indudable y a escala nacional la nueva autonomía ciudadana y su relación crecientemente electiva con los partidos y las candidaturas. La oleada antimennemista llevó a la presidencia al candidato de la Alianza que resultó triunfante en 22 de los 24 distritos, pero los candidatos a gobernadores de la coalición triunfante solo ganaron en 8, lo que sugiere la cantidad de electores que votaron por partidos diferentes según el nivel de representación que se disputaba¹⁵.

Pero casi dos años después, luego que las esperanzas puestas en la Alianza se vieron frustradas, las elecciones nacionales de renovación legislativa mostraron una fisura en la relación de la ciudadanía con la oferta electoral que sería el primer signo ostensible de la crisis de representación. En efecto, en octubre de 2001, más de 4 ciudadanos sobre 10 no concurren a las urnas, o lo hicieron expresando rechazo al votar en blanco o anulando el voto¹⁶. Los principales

14. V. al respecto I. Cheresky: «Hipótesis sobre la ciudadanía argentina contemporánea» en I. Cheresky e I. Pousadela (eds.): *Política e instituciones en las nuevas democracias latinoamericanas*, Paidós, Buenos Aires, 2001.

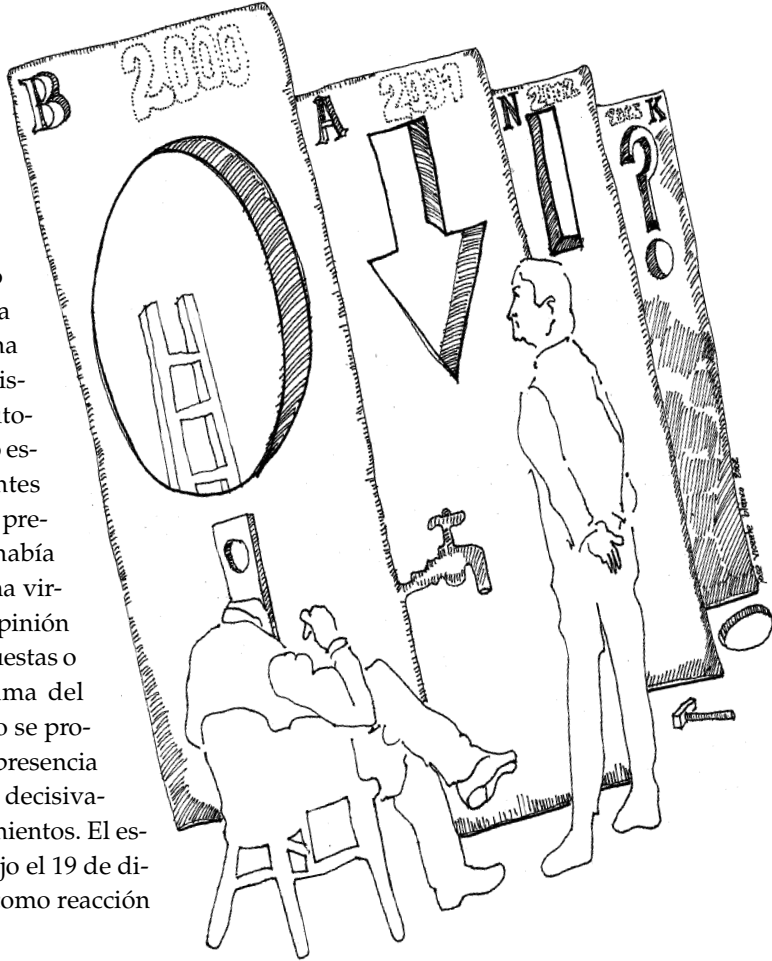
15. En algunos casos se trató de corte de boleta, pero el voto diferenciado o fluctuante fue facilitado porque las elecciones a gobernador y presidente se desdoblaron en la mayoría de las provincias.

16. Las abstenciones pasaron de 18,4% en 1999, a 26,3% en 2001 como proporción del total del padrón. Alrededor de dos millones y medio más de ciudadanos no concurren a los comicios. Los votos blancos y nulos por su parte representaron alrededor de 22% de los votos emitidos en 2001, en contraste con 6,6% en 1999. Alrededor de cuatro millones de electores eligieron esta forma de expresión crítica.

partidos redujeron considerablemente su predicamento tanto en términos absolutos como relativos¹⁷. En este sentido la ilustración del paradójico resultado electoral se expresó en el hecho de que el peronismo aparecía triunfando ampliamente y alcanzando la mayoría en ambas cámaras, aunque la cantidad de votos que había obtenido estaba

en franca retracción respecto a la elección precedente en la que, sin embargo, había perdido de un modo contundente.

El cacero-lazo. A fines de diciembre se registró un viraje al surgir una movilización ciudadana inédita. Como se ha visto, los signos de la autonomía y el descontento estaban dados desde antes pero hasta entonces la presencia ciudadana se había expresado bajo la forma virtual del estado de la opinión construido por las encuestas o por la actividad mínima del voto. Con el cacero-lazo se produce una inesperada presencia pública que gravitará decisivamente en los acontecimientos. El estallido inicial se produjo el 19 de diciembre por la noche como reacción



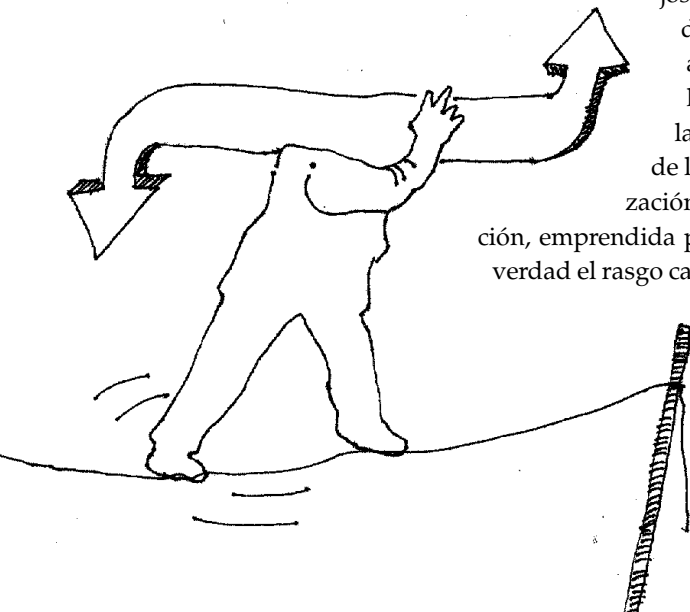
17. La Alianza vio reducirse sus votos drásticamente, de más de 8 millones en 1999 pasó a poco más de 3,1 millones en 2001. Esta última cifra representa 22,2% de los votos positivos (es decir, excluyendo los votos en blanco y anulados). Pero el peronismo también pasó de aproximadamente 6,1 millones en 1999, a menos de 5 millones en 2001. Esto representa 35% de los votos positivos. Un factor que contribuyó a debilitar el electorado de los dos grandes partidos coaliciones, que en 1999 sumaban 76,7% de los votos y en 2001 tan solo 55,2%, fue la emergencia de algunas nuevas fuerzas y la reactivación de pequeños partidos que en conjunto concitaron, aunque marginalmente, una dispersión del voto. Este aspecto es también ilustrativo del descontento ciudadano expresado en esa ocasión.

al discurso presidencial que luego de una jornada de saqueos a supermercados y comercios minoristas, que convirtieron a numerosos barrios del conurbano en tierra de nadie, daba prueba de insensibilidad y sobre todo de eludir toda visión autocrítica sobre su gestión, decretando el Estado de sitio para combatir la acción de presuntos enemigos de la República.

Las cacerolas comenzaron a sonar en un continuo que iba desde el balcón de la casa como borde del ámbito privado, hasta las calles en las que se concentraban los vecinos más activos, algunos de los cuales cortaban el tránsito en los principales cruces y protestaban durante horas, desgranándose grupos en dirección a los centros tradicionales de poder y de protesta: la Plaza de Mayo, ante la sede del Gobierno, y la Plaza de los Dos Congresos, ante el Parlamento. Toda la ciudad parecía pronunciarse, sin que se produzca la figuración tradicional de las masas congregadas en un lugar, como había sucedido en el pasado. Esta activación social se extendió espontáneamente sin liderazgos y estructuras, teniendo una primera prolongación a los centros urbanos litoraleños, para ser más amplia en los eventos futuros similares. La tentativa policial de desalojar la Plaza de Mayo dio lugar a la represión y enfrentamientos violentos, con varias muertes como saldo. Ante el repudio y el descontrol De la Rúa presentó la renuncia. Su sucesor elegido por la Asamblea Legislativa se alejaría también del cargo una semana después bajo la presión de un nuevo cacerolazo y su débil legitimidad.

Este paradigma o referencia fundacional de la activación ciudadana debe ser deslindada de otras expresiones ilustrativas de su carácter heterogéneo: acciones de reclamo ante los bancos por el congelamiento de depósitos y plazos fi-

jos, reclamos de diferentes lesionados por la pesificación como los acreedores de deudas privadas, los deudores de créditos en dólares no pesificados, etc., así como de las tentativas de dar una organización y un carácter duradero a la acción, emprendida por las asambleas vecinales. En verdad el rasgo característico del estallido y la activación ciudadana es su negatividad; convergen todos –pues el registro parece ser el de la sociedad toda, de la unanimidad so-



cial— en reacción a las iniciativas del poder. Esa convergencia negativa es la que permite una coexistencia heterogénea y presenta la novedad de una acción que no reviste la forma de un movimiento social, es decir, no tiene al menos inicialmente otro reclamo general que el utópico pero significativo «Que se vayan todos».

El estallido y la prolongación del movimiento urbano de protesta dirigido a repudiar la representación política plantearon el interrogante de su significación. Parece pertinente considerarlos como el síntoma de una profunda crisis de representación pero, aunque negativamente, con una significación política. Se trata de la expresión de un veto a las iniciativas gubernamentales y de un cuestionamiento general a los dirigentes. Es también una experiencia que ha revelado la capacidad de ejercer poder y que ha colocado la relación entre la sociedad y los dirigentes en nuevos términos: las instituciones hasta ahora vigentes aparecen debilitadas y a merced de un poder difuso de «la calle». Es decir, se plantea la posibilidad de una reinstitucionalización pero toda tentativa deberá tener en cuenta la disposición incrédula y vigilante de los movilizados. La movilización social precipitó la interrupción de la gestión de De la Rúa y de ese modo apareció como una irrupción extrainstitucional, pero fue percibida como una intervención que ponía fin a un presidente extremadamente deslegitimado, produciendo un impase frente al cual las instituciones representativas y la propia oposición aparecían como impotentes. En este sentido, la intervención ciudadana cumplió una función reguladora que desbloqueó la situación y permitió que el proceso retomara luego un cauce institucional¹⁸. La movilización «negativa» prolonga la crisis en el sentido que pone de relieve la ausencia de representación e inhibe la posibilidad de una solución meramente interna al sistema institucional representativo. Ello está ilustrado en la situación presente, con un gobierno que cuenta con una inédita y muy amplia coalición parlamentaria de sustento, en la que se mezclan peronistas, radicales y frepasistas, que padece de una profunda debilidad por su escaso reconocimiento social.

La movilización social urbana cuestionadora y pacífica constituye una extraordinaria ampliación del espacio público. Parece así revertirse la corriente hacia la privatización de los individuos y hacia una relación con la vida pública extremadamente segmentada que prevalecía desde los años 80. Esta ampliación tiene la potencialidad de revigorizar el régimen democrático puesto que se tra-

18. Queda así cuestionada una visión hiperinstitucionalista de la democracia que ignora la primacía de los principios democráticos por sobre formas institucionales concretas, lo que se pone en evidencia en situaciones de crisis.

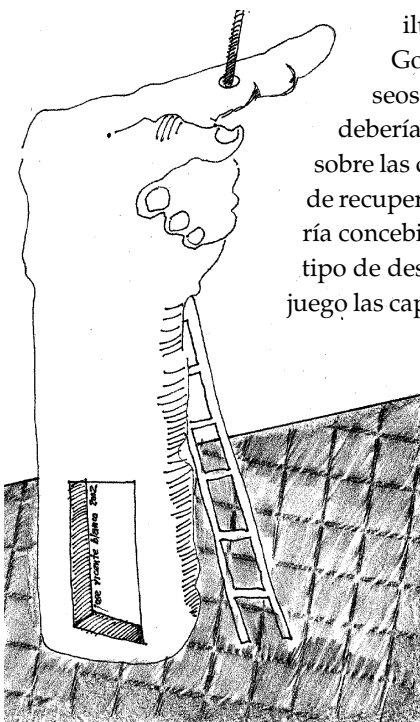
***Se ha desplegado
una escena
ciudadana
y vecinal
que podría dar
nuevas bases
a la vida pública
e incluso
al surgimiento
paulatino
de nuevos
liderazgos***

ta también de una presencia que no predica en absoluto un cambio de régimen político sino que actúa en vistas a ejercer una influencia. Por cierto, la movilización es realmente heterogénea y coexisten en ella potencialidades distintas. Las asambleas zonales congregadas desde principios de enero ilustran una posible evolución deliberativa y de organización barrial. Podríamos asistir a un notable renacimiento de la sociedad civil, en la que nuevas asociaciones combinen preocupaciones políticas y vecinales. Pero también se ha evidenciado la propensión a la acción directa, es decir, a mantener un estado de movilización permanente encontrando blancos del rechazo e incluso chivos expiatorios hacia las cuales dirigir sucesivamente las energías. Los «escraches» ilustran esta potencialidad de violencia, puesto que cercando domicilios particulares e incluso dañándolos y haciendo objeto de escarnio a los «escrachados», se da libre cauce a que grupos *ad hoc* pronuncien veredictos sobre las personas ignorando a la justicia y la protección de los derechos. Esa práctica podía sumarse a otras que apuntan a la desagregación social y a los enfrentamientos descontrolados.

En definitiva, se ha desplegado una escena ciudadana y vecinal que podría dar nuevas bases a la vida pública e incluso al surgimiento paulatino de nuevos liderazgos, que por el momento tendrían un alcance local. Pero la recomposición de la situación y en particular la recreación de un lazo de representación que asegure la productividad política de la sociedad movilizada, dependen de la emergencia de nuevas fuerzas políticas y eventualmente de la renovación de las tradicionales. Una renovación política venida exclusivamente o aun esencialmente «desde abajo» no parece estar a la orden del día. Pero cualquier reconstitución de los lazos políticos no podría pensarse como una vuelta al sistema tan desarticulado por los acontecimientos recientes, ni podría hacerse ignorando la nueva presencia de una ciudadanía activa.

El rumbo democrático

El desorden general, el apremio del empobrecimiento en expansión y la pérdida de soberanía resultante de la vulnerabilidad externa no son propicias para la rehabilitación de la política. Por el contrario esas restricciones alertan sobre el riesgo de la inestabilidad y la violencia. Sin embargo, existe una potencialidad colectiva consciente de esos escollos y propensa a la prudencia, como lo



ilustra un estado de ánimo general crítico respecto del Gobierno y aun dubitativo sobre su legitimidad pero deseoso de que continúe y finalice su mandato legal¹⁹. Pero debería surgir un debate que encienda una luz de esperanza, sobre las capacidades de la decisión ciudadana y la posibilidad de recuperar la soberanía hoy retaceada. Este horizonte requeriría concebir, a diferencia de lo sucedido en la última década, un tipo de desarrollo y de integración con el mundo que ponga en juego las capacidades nacionales y se aleje de un modelo simple y homogeneizante de globalización.

La recomposición de la representación política debe ser encarada, pero sin ceder a las tentaciones demagógicas de la antipolítica. El redimensionamiento de recursos e instituciones debe ir a la par de una reforma de los sistemas electorales que permita las candidaturas independientes y la participación ciudadana por vías referendarias, cuidando por supuesto de no favorecer la ilusión plebiscitaria que quita su lugar a las instituciones representativas y a la elaboración de políticas en contextos específicos. La activación social ciudadana es una fuente poderosa de renovación política, en primer lugar porque condiciona de modo tal que nada podrá hacerse sin tener en cuenta esa fuente de crítica, control y eventualmente proposición ciudadana. Ella puede ser también el semillero de nuevos liderazgos, pero la reconstitución de la representación política depende sobre todo de la iniciativa e imaginación de quienes intervienen en la política por vocación y se organizan para ello.

También debe tenerse en cuenta que las trazas de la debacle serán duraderas también en el plano social. Un orden político viable debería recuperar sus capacidades de efectuar políticas de integración social. Ello supone asimilar la experiencia de los últimos años que invita a alejarse de las utopías tecnocráticas que predicán o admiten un crecimiento dissociado de la justicia social. Amén de las consideraciones éticas, una concepción de crecimiento y democracia restringida generan las condiciones para su inestabilidad y caída.

19. Una reciente encuesta es categórica: 67% desaprueba la tarea presidencial (aun 81% desaprueba la tarea económica del Gobierno), pero la mayoría prefiere que Duhalde termine el mandato (58%) a que se convoquen elecciones anticipadas (35%) (Gallup, *La Nación*, 14/4/02).